

## **MENSAJE DEL GOBERNADOR ROGELIO FRIGERIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ENTRE RÍOS.**

147° Período de Sesiones Ordinarias.  
*Paraná, 18 de febrero de 2026.*

Volver a encontrarnos en este recinto es una oportunidad para rendir cuentas y reflexionar sobre el momento que estamos atravesando y los desafíos que tenemos por delante.

La primera vez que hablé frente a ustedes en este mismo espacio les dije que nuestro objetivo era poner a la provincia en el lugar que se merece, y fui claro: salir adelante no iba a ser fácil ni inmediato.

Ese primer año fue el de enfrentar la realidad sin atajos y hacer lo que durante décadas se había evitado. Ordenar, decir las cosas como son, asumir costos y empezar a orientarnos en el rumbo correcto.

Un año después, les dije que habíamos demostrado con hechos concretos que ese cambio de rumbo era real.

La primera mitad de la gestión nos exigió romper inercias y tomar decisiones incómodas para la política. Y bienvenida sea esa incomodidad.

Porque no hay transformación posible si todo el esfuerzo recae en quienes hace demasiado tiempo vienen sosteniendo sobre sus espaldas la ineficiencia del Estado.

Si la política está cómoda y los entrerrianos están incómodos, el Estado fracasó.

Si los dirigentes no somos los primeros en esforzarnos, algo estamos haciendo mal. Y alguien está pagando ese costo, en silencio.

Yo no vine a estar cómodo y este equipo de gobierno no es para funcionarios que busquen la comodidad. Vinimos a trabajar para dejar una provincia mejor de la que recibimos.

Y eso nos pone frente a una nueva exigencia. Porque cuando se ordena, cuando se rompe con la desidia y cuando se empieza a avanzar, ya no alcanza con cumplir.

La vara no puede quedarse donde está: tiene que subir, siempre.

La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas.

Cuando lo que antes naturalizábamos, no lo permitimos más.

Cuando la sociedad deja de sorprenderse porque el Estado funciona y exige que cada vez funcione mejor.

Quiero una sociedad despierta, consciente de lo que merece, pero también informada de la realidad.

Yo creo en una Entre Ríos que transforma los avances en piso, y el piso en punto de partida.

Empieza otra etapa para los dirigentes: la de exigirnos más y no conformarnos con lo que ya hicimos. Gobernar mejor es una obligación permanente.

Hoy estamos en otro momento. No porque los problemas estén resueltos, ni porque el camino sea sencillo, sino porque ya dimos ese primer paso que durante años nadie quiso dar.

Empieza una etapa donde no alcanza con haber cambiado el rumbo: hay que sostenerlo, consolidar los avances que logramos y transformarlos en un estándar permanente de gestión.

La vara no se eleva señalando con el dedo hacia afuera sino empezando por casa. Se eleva con austeridad, eliminando los gastos reservados, recortando a la mitad los cargos políticos y un tercio de los contratos, poniendo fin al uso personal de los autos oficiales, o revisando cada peso que se derrochaba, como sucedía con las compras del Estado o los alquileres de las oficinas públicas.

Esa lupa quirúrgica con la que analizamos cada proceso y cada gasto del Estado abrió una puerta que nadie había querido abrir: expedientes que se acumulaban, sumarios cajoneados contra empleados que tenían hasta 200 faltas injustificadas, pases a planta sin concurso previo, funcionarios que cobraban más de un sueldo del Estado provincial y cientos de adscripciones docentes otorgadas sin control o por amiguismo. Es decir, docentes que no estaban en las aulas sino en otras reparticiones, y esto generaba que los entrerrianos tuviésemos que pagar doble y hasta triple sueldo por cada cargo.

Sólo en dos años, aceleramos expedientes y resolvimos un 200 por ciento más de sumarios que en toda la gestión anterior, y aplicamos las sanciones económicas y disciplinarias correspondientes: más del 80 por ciento de esos casos terminó en cesantías.

Recortamos un 98 por ciento de las adscripciones, pusimos fin a los contratos basura y hoy el ingreso al Estado es sólo mediante concursos públicos, abiertos y transparentes; y creamos la planta transitoria de gabinete para no seguir engrosando la planta permanente estatal a costa de los contribuyentes. Todos los funcionarios que vinieron conmigo, se van a dedicar a otra cosa cuando termine la gestión.

Revocamos las transferencias y recategorizaciones irregulares, e impulsamos la ley de Transición de Gobierno para dejar un precedente institucional que ordene cada cambio de gestión.

Otra reforma que hicimos fue en el sistema de compras y contrataciones, para generar ahorro y tener trazabilidad y control sobre la calidad de lo que se adquiere.

Y no sólo eliminamos la posibilidad de cobrar más de un sueldo del Estado provincial, sino que dimos un paso más: decidimos que algunos funcionarios de la Administración central ocupen también cargos en directorios de empresas y entes descentralizados para que dejen de cobrar por la Administración central y así poder ahorrarnos algunos sueldos.

Otro desafío que encaramos implicó una tarea silenciosa pero decisiva: analizar y ordenar las estructuras orgánicas de cada ministerio, que en muchos casos se mantenían en el tiempo sin mucho sentido. Teníamos que devolverle coherencia, claridad y sentido a la acción del Estado.

Reorganizar las estructuras significó redefinir responsabilidades, eliminar superposiciones y fortalecer capacidades para responder mejor a las demandas de la sociedad.

Cumplir este objetivo exigía ocuparnos de los problemas estructurales que impiden nuestro desarrollo. Los entrerrianos nos pidieron cambiar la provincia, y para eso es indispensable resolver los desequilibrios más profundos, como la deuda pública, la Caja de Jubilaciones, la Obra Social de la provincia y el sistema energético.

En estos dos años logramos algo que parecía imposible: en un escenario adverso y de caída de la recaudación, similar al que en otros momentos llevó a gobiernos al default, no sólo mantuvimos a la provincia en pie, sino que pasamos del déficit al equilibrio, ordenamos las cuentas públicas y, al mismo tiempo, evitamos el default y redujimos la deuda.

Hoy la provincia tiene menos deuda, ya que bajamos el stock de 723 millones a fines de 2023 a 684 millones en el último dato de 2025, y alcanzamos un logro aún más importante: reducir a menos de la mitad su peso sobre los ingresos. Hace apenas dos años la deuda representaba el 45% de los ingresos provinciales; hoy es el 19%.

Todo esto considerando la deuda total consolidada, sin incluir la deuda flotante y los 30.000 millones de pesos en compromisos impagos con contratistas del Estado, situación que mantenía a la provincia paralizada.

Honrar nuestros compromisos mejoró la calificación crediticia de la provincia en los rankings internacionales y eso fortaleció la confianza en nuestra capacidad de pago, lo que nos permite hoy estar avanzando para salir al mercado próximamente y reperfilarse la deuda heredada; es decir, buscamos mejorar las condiciones de la deuda existente que tiene concentrados los vencimientos de

amortización en los próximos tres años, algo que es claramente muy desventajoso y poco frecuente.

Hoy somos una provincia que cumple, que ordena y que empieza a recuperar credibilidad en el mundo. Una provincia que entiende que no debe endeudarse para solventar el gasto corriente, y que para eso es clave sostener el equilibrio fiscal.

Somos una provincia que ya no toma deuda sin saber para qué, porque los entrerrianos tenemos derecho de saber qué se hace con nuestro dinero. Por eso impulsamos la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, y les pido a los legisladores que le den pronto tratamiento a este tema. Porque la deuda no es buena o mala en sí misma, el problema es no saber para qué se toma, o que se tome para hacer supuestas obras que después no se ven en las rutas, ni en los hospitales ni en las escuelas.

Los mayores desafíos los encontramos en áreas de gran peso presupuestario, como la Caja de Jubilaciones y la obra social, donde se concentraban déficits crecientes y riesgos que, de no haberse intervenido, comprometían el funcionamiento mismo del Estado.

En el primer año de gestión, logramos salvar la Caja de Jubilaciones del colapso, ya que tenía un déficit del 42 por ciento que venía aumentando cerca de un punto cada año. Si no hubiésemos tomado acciones, sólo en 2024 habríamos gastado 100 mil millones de pesos más de lo que se terminó erogando y el déficit sería de más del 50 por ciento, cuando hoy es cerca de la mitad.

Se trata de un desbalance que se cubre con recursos de la provincia, es decir que todos los contribuyentes entrerrianos son los que financian con sus impuestos el déficit de la Caja, la mayoría de los cuales cobran jubilación por Anses y no acceden a los beneficios de jubilarse en el sistema provincial.

Para que se entienda la gravedad de la situación que revertimos en unos meses: si seguíamos así, en pocos años la provincia no iba a poder pagar más jubilaciones. Si seguíamos así, no íbamos a poder sostener el 82 por ciento móvil. Pero ordenamos el sistema, avanzamos en controles y auditorías que permitieron corregir irregularidades como jubilaciones que se pagaban dos veces, tomamos medidas postergadas durante décadas y reclamamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los fondos que le corresponden a la provincia por parte de Anses, algo que ningún gobierno antes había hecho.

Todo este esfuerzo fue indispensable; nos permitió estabilizar la situación, evitar una crisis inmediata y reducir a la mitad el déficit hacia el que nos encaminábamos. Pero sería irresponsable decir que con eso el tema quedó resuelto. Lo que este proceso dejó en evidencia es que, aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo un problema estructural.

Habiendo tomado las medidas que tomamos, el déficit equivale a cinco veces la inversión anual de la provincia en infraestructura, y es el mismo monto de lo que pagamos todos los entrerrianos de la boleta de luz en todo un año. Por eso, en las próximas semanas, después de reunirnos con los representantes de los trabajadores del Estado y los miembros de la oposición, vamos a enviar, finalmente y después de décadas de postergaciones, un proyecto para que nuestro sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible.

El Iosper era otro ejemplo de un sistema desordenado y deficitario. Cuando decidimos intervenir la obra social, sabíamos que atravesaba una situación crítica que no admitía más parches ni soluciones parciales, porque estaba en juego la sustentabilidad de la obra social de más de 300.000 entrerrianos que trabajaron o actualmente trabajan en el Estado.

Había un pasivo que se expandía sin control, serias falencias en los mecanismos de gestión y una estructura que había perdido capacidad de respuesta y orden interno. Incluso un reciente informe del síndico fiscalizador, en los únicos fragmentos sustentados en datos objetivos y mensurables, da cuenta del profundo deterioro económico y financiero registrado durante 2024, es decir, en el período previo a la intervención y bajo el esquema de conducción anterior, con representación únicamente sindical en el directorio.

Frente a ese escenario, intervenir era la decisión más responsable que exigían los hechos. Y avanzar hacia un nuevo marco institucional como fue la creación de OSER, la nueva Obra Social de Entre Ríos, era una respuesta a la necesidad imperiosa de reconstruir reglas de transparencia, conducción profesional y topes salariales.

Esta decisión ya generó un ahorro de más de 1.250 millones de pesos en cargos de conducción.

La normalización de una institución de esta magnitud no se resuelve con una sola ley. Requiere gestión sostenida, información clara y controles permanentes.

Sabemos que falta y que todavía estas mejoras no se ven del todo reflejadas en mejores prestaciones para los afiliados, pero estamos destinando cada peso recuperado a este objetivo.

Vamos a seguir por este camino. Nada va a desviarnos del rumbo que eligió la sociedad en 2023 y que convalidó en octubre pasado.

Al mismo tiempo, avanzamos en otro frente clave: pusimos en marcha una agenda estructural de transparencia y de modernización.

Garantizamos el acceso a la información pública e impulsamos un régimen claro de transparencia y ética en la función pública.

Creamos Entre Ríos Transparente y el Portal de Datos Abiertos, para que cualquier ciudadano pueda controlar el funcionamiento del Estado y consultar la nómina de funcionarios, las escalas salariales y las declaraciones juradas hasta el tercer nivel.

Implementamos el Expediente Electrónico y todos los decretos que firmo diariamente y las resoluciones ministeriales se emiten de forma 100 por ciento digital.

Así como puertas adentro ordenamos el Estado, puertas afuera simplificamos la vida de la gente: con la plataforma Mi Entre Ríos, centralizamos los trámites y la información en un solo lugar.

Hacer un Estado más transparente, más eficiente y más inteligente es dar a la sociedad información fiable y herramientas concretas para participar, exigir y elevarnos la vara a todos.

Por eso, mientras revisábamos los procesos y recortábamos el gasto, atendimos la emergencia social y, al mismo tiempo, empezamos a cambiar la lógica de fondo. Porque la asistencia sirve cuando abre caminos.

El criterio fue llegar a toda la provincia con reglas claras y sin discrecionalidad para que los recursos lleguen a todos los que necesitan.

La alimentación fue una prioridad. Por eso impulsamos la Ley de Emergencia Alimentaria y, en el primer año, aumentamos en un 2.000 por ciento las partidas para alimentos.

Pusimos orden para llegar mejor y reducir al mínimo la posibilidad de desvíos: bancarizamos los aportes directos, garantizamos trazabilidad, implementamos un registro de proveedores, hicimos un control estricto en los comedores y actuamos con firmeza cuando detectamos irregularidades.

También medimos para planificar, porque las mejores políticas se basan en datos. En articulación con la UADER, iniciamos un relevamiento nutricional en comedores escolares para diseñar políticas específicas y evaluar su impacto en el tiempo.

También fortalecimos la protección de derechos de los niños, los adolescentes y las familias, aumentando de manera histórica sus recursos, garantizando condiciones básicas en centros de día y duplicando el alcance de los programas de acompañamiento familiar.

Pasamos de la asistencia permanente a la autonomía y el desarrollo como horizonte. Este año vamos a aumentar en un 62,5 por ciento los recursos destinados a los programas diseñados para acompañar el desarrollo emprendedor.

La autonomía económica de las mujeres fue otro objetivo central. Implementamos Mujeres sin Barreras, con formación y apoyo, y sumamos un Punto Móvil que recorre la provincia para acercar la prevención y la asistencia.

Para 2026, aumentamos el presupuesto para políticas de género en más de un 43 por ciento.

Aumentamos en un 34 por ciento la asistencia a personas con discapacidad que no tienen obra social, hogar o personas que los cuiden. E incrementamos en un 162 por ciento los recursos destinados a programas que promueven una vida activa y saludable para las personas mayores.

Y una de las tareas más importantes que tiene cualquier equipo de gobierno: nos ocupamos de cuidar la primera infancia. Hoy Entre Ríos cuenta con una estrategia provincial integral, elaborada entre Unicef y una mesa interministerial, con líneas de acción claras en acompañamiento familiar, educación y salud. Fuimos la primera provincia que firmó con Nación para ser parte del Programa Federal de Primera Infancia.

Cuidar a los entrerrianos es también construir una política habitacional que pueda dar respuestas distintas según la realidad de cada familia. Es una de las deudas más grandes que tenemos como provincia.

En estos dos años, empezamos a avanzar por este camino: ordenamos el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda para que los fondos del FONAVI se dejaran de usar en su totalidad para pagar sueldos y gastos de funcionamiento del organismo, y nos enfocamos en resolver la situación de las más de 2.562 viviendas que estaban abandonadas o a medio hacer.

Ya resolvimos la situación del 70 por ciento de esas viviendas, ya sea porque terminamos la construcción o porque están nuevamente en obra y próximas a concluirse. Con respecto al 30 por ciento restante, en común acuerdo con los intendentes, se decidió no continuar con las obras, por ejemplo, por tratarse de terrenos no aptos para la construcción de vivienda.

Además, licitamos nuevas viviendas en distintos puntos de la provincia y acompañamos a municipios con obras para generar suelo urbano.

Otro eje clave fue dar seguridad jurídica. En la primera mitad de la gestión, empezamos a resolver el escenario que encontramos: 20.000 viviendas sin escriturar y 4.800 escrituras que nunca habían sido entregadas.

Ya entregamos más de 3.300 escrituras y suscribimos más de 5.000 escrituras adicionales que están en proceso de inscripción.

También pusimos en marcha el crédito individual sobre lote propio, para quienes pueden encargarse de construir o terminar su vivienda. Hoy hay casi

400 créditos activos y este año nos proponemos alcanzar las 1.000 viviendas construidas por este mecanismo.

A esto se suma una decisión concreta que logramos a partir de nuestras gestiones con el Gobierno Nacional. Había terrenos nacionales lindantes al hospital De la Baxada que estaban en proceso de venta; logramos que se cancelara ese proceso para que se transfieran a la provincia en el marco de la compensación de deuda que estamos llevando adelante. Esto va a permitir impulsar, junto al sector privado, un plan de más de 300 viviendas en Paraná.

Estamos empezando a saldar una deuda que lleva demasiados años y sostuvimos, en el 2025, el mismo ritmo de construcción promedio de viviendas que las gestiones anteriores, con muchísimos menos recursos. Pero somos conscientes que no es el camino. Yo no me conformo. En los próximos años, vamos a seguir trabajando para cambiar el paradigma de la política habitacional en la provincia. El Estado constructor de viviendas, tal como lo conocimos durante décadas, fracasó en sus objetivos.

Necesitamos un Estado que genere herramientas de acceso al crédito hipotecario y que articule soluciones para que más entrerrianos puedan acceder a su primera vivienda. Y estamos trabajando para promover esquemas que faciliten también el acceso al alquiler, para nuestros jóvenes que buscan independizarse.

Otra deuda que empezamos a saldar en estos dos años tiene que ver con la salud pública, área en la que trabajamos para tener por primera vez una estrategia unificada y orientar los recursos con planificación para que a ningún entrerriano le falte atención.

Los centros de salud son la puerta de entrada al sistema y, en muchas localidades, el único prestador. Por eso estamos fortaleciéndolos para simplificar el acceso y llegar a más personas.

Le dimos una nueva impronta a la Estrategia de Atención Primaria a través de la Ronda Sanitaria, para que los vecinos de zonas rurales alejadas puedan hacerse controles y para detectar riesgos en la comunidad.

Estamos dando un paso histórico: este año vamos a hacer la primera compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales de mayor complejidad de la provincia. Esto significa más eficiencia de recursos aprovechando el poder de compra del Estado, mejor logística y más control de lo que se gasta y de la calidad de los medicamentos.

Además, estamos recuperando nuestros establecimientos sanitarios con obras concretas: nuevas terapias intensivas, ampliaciones, guardias renovadas, servicios modernizados. Villaguay, Gualaguay, Feliciano, Concordia y muchas otras localidades hoy tienen, gracias a esta inversión, mejor servicio.

Ya intervenimos 32 hospitales, prácticamente la mitad de los que tiene la provincia, entre los cuales logramos reactivar las obras del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, que fue iniciada hace 17 años e inaugurada varias veces.

Y otro hito fue haber logrado el traspaso del hospital de la Baxada de Paraná a la provincia. Ahora sí tenemos la posibilidad de reactivar las obras que estaban paradas en ese establecimiento desde hace 10 años.

En los próximos dos años, vamos a poner foco en estos dos hospitales, además de otras obras prioritarias como la nueva terapia intensiva en La Paz.

Por otra parte, renovamos el sistema de emergencias con 21 nuevas ambulancias y este año vamos a seguir sumando vehículos.

Hay una parte clave de la red de atención, que tiene que ver con los pacientes que necesitan ser tratados en Buenos Aires. A través de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, ordenamos e hicimos más eficiente la derivación y el acompañamiento de pacientes entrerrianos de escasos recursos y sin obra social que necesitan atenderse en Capital Federal.

Una apuesta fuerte que tenemos es la salud digital. Más de un millón de atenciones ya están registradas en la plataforma de Salud Entre Ríos. Avanzamos con historia clínica electrónica, receta digital, turnos online y digitalización de imágenes médicas en 27 hospitales. Y, en paralelo, avanzamos en la implementación del sistema PACS, que sirve para almacenar y compartir en la nube imágenes de Rayos X, mamografías y tomografías. A partir de esta herramienta, pusimos en marcha la Central de Informes de Mamografía de Entre Ríos, algo inédito en el país que favorece la detección temprana del cáncer de mama. Y este año vamos a seguir fortaleciendo la telemedicina, con apoyo de organismos internacionales.

No puedo hablar de salud sin referirme a la salud mental. Cuando asumí, decidí que fuera una de las principales prioridades de mi gestión, porque los indicadores de suicidio a nivel global y a nivel de la provincia realmente preocupan.

Hoy tenemos una política que integra a varias áreas del gobierno. Empezamos por algo básico: impulsar una campaña para que se hable del tema, porque está demostrado que hablar y escuchar sin juzgar puede aliviar y evitar situaciones extremas.

Además, decidimos conformar un Observatorio Provincial para prevenir el Suicidio, porque no hay información unificada y cada organismo tiene estadísticas distintas.

Hoy no sólo trabajamos para tener un registro más claro de la cantidad de casos que existen, sino que también implementamos un sistema por el cual los hospitales notifican los intentos de suicidio, para atender mejor la problemática.

Creamos la línea 135, que es más fácil de memorizar, y la enrutamos al 0-800 que ya existía, capacitamos a docentes y directivos, y trabajamos con los medios de comunicación, con las familias y, por supuesto, con los jóvenes de la provincia. E implementamos un Protocolo de Intervención para abordar situaciones de crisis de salud mental en vía pública.

La seguridad de todos los entrerrianos es otro tema prioritario para nosotros, porque sabemos que afecta a nuestras vidas y a nuestro desarrollo, al tener también impacto directo en la llegada de inversiones y turistas.

En esta primera etapa de la gestión, avanzamos en tres pilares claves: más presencia territorial, más formación profesional y más tecnología.

Con los operativos Barrios Seguros, Campo Seguro y Plazas Seguras aumentamos de manera sustancial la presencia de la policía y nos adelantamos al delito.

Además, reforzamos el control en puntos clave de acceso a la provincia como el Túnel Subfluvial y el enlace Victoria–Rosario, y vigilamos 24 horas la frontera con Corrientes, un punto crítico.

En estos dos años, llevamos adelante un 60% más de procedimientos que en gestiones anteriores, con un 2700% más de secuestro de cocaína y un 900% más de marihuana incautada.

Lo dije mil veces y lo voy a decir mil veces más. La Fuerza de Seguridad de Entre Ríos es la mejor del país. Y ahora, además, cuenta con el apoyo político necesario para cumplir su tarea.

Dotamos a nuestras fuerzas con armamento, movilidad y tecnología, con una inversión histórica de casi 4.000 millones de pesos. Incorporamos camionetas 4x2 y 4x4, motocicletas, 1.300 chalecos antibalas y pistolas reglamentarias 9 milímetros. Y, por primera vez, se compraron armas no letales para hacer un uso más eficaz de la fuerza.

El delito se vuelve cada vez más complejo, las modalidades delictivas cambian, por eso la formación profesional de nuestra fuerza es central.

Creamos la carrera administrativa dentro de la Policía para que todo aquel que esté entrenado para portar un arma salga a la calle y no esté detrás de un mostrador, y actualizamos los planes de estudios de la carrera policial.

Otro punto sensible del combate contra el crimen son las cárceles. El trabajo de estos dos años estuvo centrado en recuperar control, mejorar las condiciones de detención y reducir la reincidencia. Sumamos nuevos espacios educativos y laborales para que las cárceles no sean escuela de delincuentes.

Hicimos mejoras edilicias y de mantenimiento en todas las unidades penales de la provincia. Y vamos a empezar el proyecto de ampliación de la Unidad Penal de Federal.

Además, creamos el Cuerpo Especial de Alto Riesgo, fortalecimos la capacidad operativa de las divisiones caninas y establecimos una coordinación estratégica de las Unidades Especiales para potenciar los recursos de nuestras fuerzas.

Si hay un área que define el futuro de una provincia, es la educación.

Como en tantas otras áreas, no había margen para elegir: había que resolver lo urgente sin dejar de trabajar en lo importante.

Atendimos algo impostergable: la infraestructura escolar fue una prioridad dentro de nuestro plan de obras. Muestra de esto es que decidimos destinar el 30 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a obras en el sistema educativo. Entre la provincia, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande y la Unidad Ejecutora Provincial, ya mejoramos más de 500 escuelas, un tercio del total, y estamos trabajando para terminar la gestión con mejoras en el 100 por ciento de los establecimientos.

Ordenar el sistema educativo fue otro paso clave que dimos al principio de la gestión.

Hoy sabemos quiénes son nuestros estudiantes y dónde están. La identificación nominal alcanzó casi el 99%, el porcentaje más alto de la región, lo que permitió depurar duplicaciones, detectar ausentismo crítico y prevenir abandono.

Quiero detenerme un momento en un tema que define el futuro de Entre Ríos: la alfabetización de nuestros alumnos. Durante muchos años discutimos educación con intuiciones, con diagnósticos parciales o, peor aún, sin datos. Hoy eso empezó a cambiar.

Más de 21.000 alumnos del nivel inicial y 50 mil de primaria ya forman parte de este plan con seguimiento real. Y en 2026 vamos a llegar al 100 por ciento, además de fortalecer la alfabetización avanzada en segundo ciclo de primaria y avanzar en la enseñanza de Matemáticas.

En el primer año de gestión, medimos lectura en 2º grado con una cobertura récord. ¿Y qué mostraron los resultados? Que cuando el Estado fija objetivos claros, evalúa y acompaña, las mejoras llegan: en estos dos años, aumentó casi un 10 por ciento el nivel adecuado en fluidez lectora.

La secundaria también exigía un cambio profundo para revertir problemas estructurales: repitencia, sobreedad y un desorden administrativo que impactaba directamente en la calidad educativa.

Pero ordenar no era el objetivo final, que siempre fue empezar a discutir en serio qué escuela queremos. Porque el problema, más allá de lo administrativo, es pedagógico. Siempre lo explico así: si una persona nacida en el año 1900 apareciera hoy en nuestra provincia, se sorprendería al ver casi todo: la tecnología, la medicina, la forma de trabajar. El único lugar donde no se sorprendería tanto es en la escuela.

Estamos decididos a empezar a cerrar la brecha que existe entre la realidad y los contenidos que se enseñan.

Uno de los objetivos centrales en este punto fue vincular a la escuela con el mundo laboral. Y actualizamos la currícula incorporando robótica, programación y nuevas tecnologías, además de poner en marcha el Bachillerato en Programación, que buscamos expandir a toda la provincia. Ya logramos que empezaran a mejorar los indicadores de promoción y egreso, pero sabemos que falta y estamos trabajando para que mejoren aún más.

Además, ya completamos la conectividad en escuelas urbanas y este año, a través de Enersa, vamos a llevar conectividad al 100 por ciento de las escuelas rurales. Donde hay una escuela, tiene que haber conexión.

Sabemos que la realidad demográfica plantea nuevos desafíos. Menos nacimientos, escuelas rurales con pocos estudiantes y un mapa educativo que necesita ser repensado. Por eso iniciamos una reconfiguración del sistema educativo para los próximos años, con un criterio claro: más eficiencia en el uso de los recursos y más calidad pedagógica.

Nada de esto sería posible sin los que sostienen la escuela todos los días. Por eso trabajamos en la formación y la revalorización del rol docente y, con muchísimo esfuerzo en un contexto donde los recursos caen, logramos sostener el poder de compra de los docentes. Sabemos que la situación sigue siendo difícil y que el salario todavía está lejos de reflejar la responsabilidad que tienen. Por eso el compromiso es tratar de mejorarlo, con responsabilidad y sin promesas vacías.

Y si hablamos de educación, no puedo dejar de mencionar la mejor escuela de valores: el deporte.

Ayudamos a los clubes a bajar sus costos de seguridad en eventos deportivos, digitalizamos trámites para que no pierdan tiempo y plata viajando a Paraná, subsidiamos hasta el 45 por ciento de la tarifa eléctrica, y hoy un 30 por ciento de los clubes de barrio directamente no paga la luz.

Relanzamos el Consejo Provincial del Deporte y, de la mano del Instituto Provincial del Seguro, garantizamos que todos los deportistas tengan cobertura.

Dimos un paso histórico con la Ley de Mecenazgo Deportivo, que va a cambiar el paradigma de la política deportiva al invitar a los privados a invertir en infraestructura y desarrollo para nuestros deportistas.

Y como sabemos que el deporte mueve la economía y el turismo, trabajamos para que Entre Ríos sea sede de grandes eventos como el Seven de la República, el IronMan de Gualeguaychú, el Triatlón de La Paz, el Rally Argentino, el TC y el Turismo Nacional.

En estos dos años, también trabajamos para que la cultura sea un derecho de todos los entrerrianos, para impulsar a nuestros artistas y para desarrollar la industria cultural. Llevamos a cabo en Concordia la primera Feria Provincial del Libro, logramos que la última edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos fuera la más concurrida de la historia y abrimos más de 120 espacios culturales para la Noche de los Museos.

Y gracias a que impulsamos la participación de 40 marcas y emprendimientos entrerrianos de la Feria del Centro, en Córdoba, diseñadores entrerrianos pudieron desembarcar en Nueva York.

Que haya trabajo en el sector privado es una obsesión para mí y, por lo tanto, para esta gestión.

Durante demasiado tiempo, se instaló una idea equivocada de progreso en nuestra provincia. Como si el mayor sueño que pudiéramos ofrecerle a un hijo o a un nieto fuera entrar a la planta permanente del Estado.

Yo no puedo concebir ese horizonte. El Estado no puede ser la aspiración final de una familia. Tiene que ser el punto de apoyo para que una provincia produzca y genere trabajo.

Como sociedad, nos debemos un cambio cultural de fondo.

Y en este punto quiero hacer una reflexión. El momento difícil que estamos atravesando nos exige un esfuerzo adicional de coordinación y responsabilidad entre los Poderes del Estado.

Desde el primer día, pusimos a disposición del Poder Judicial todas las herramientas del Ejecutivo para avanzar en las reformas que fueran necesarias, con un objetivo claro: que jueces y magistrados puedan actuar con plena independencia.

También es necesario decir algo con honestidad: las decisiones judiciales no son neutras en términos de impacto social y económico. Hay ejemplos de fallos que trascienden el caso puntual y generan efectos sobre el empleo, la inversión y la sostenibilidad de los sistemas públicos. No tengo que contarles la cantidad de pymes que quiebran por las sentencias de los juicios laborales que reciben. Por eso, el desafío es trabajar con un objetivo común, que sé que compartimos los tres poderes: mejorar la vida de los entrerrianos.

Las leyes laborales sirven para proteger los derechos de los trabajadores, pero cuando se utilizan para simular situaciones ficticias con el único fin de obtener

un rédito económico, y eso termina poniendo en riesgo la continuidad de empresas y fuentes de trabajo, ahí el sistema deja de cumplir su función. Y frente a eso, no podemos mirar para otro lado.

Sé que la gran mayoría de los magistrados lo entienden así, y por eso voy a insistir con esto para los pocos que no comparten esta mirada: las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo. Necesitamos previsibilidad y razonabilidad.

En la misma línea, quiero referirme al uso permanente del amparo. El amparo puede ser una herramienta excepcional para accionar judicialmente cuando se está vulnerando un derecho, pero cuando se lo convierte en atajo sistemático y los fallos no analizan con rigor el sustento del reclamo, se termina perjudicando a miles. Hay ejemplos fuera de todo criterio de razonabilidad, como un fallo judicial que obligó a OSER a cubrir una silla de ruedas específica de 90 millones de pesos, pese a que existía en los depósitos una alternativa equivalente de menor costo. O casos en los que se hizo lugar a amparos por reintegros de 15.000 o 20.000 pesos, sin que el afiliado hubiese presentado los recibos correspondientes, generando costas judiciales por 1 millón y medio de pesos.

Cuando esto pasa a ser la regla y no la excepción, estamos ante un problema del sistema en su conjunto que nos interpela a todos.

El Estado no puede despilfarrar recursos. Tiene que ordenar y tiene que cuidar lo esencial para lograr su mayor éxito: impulsar el crecimiento de los entrerrianos para intentar que nadie dependa de él.

En estos dos años, avanzamos en esa dirección: mejorando las reglas, la infraestructura, la tarifa eléctrica y la estructura impositiva. Pero también fuimos por más. Porque no me conformo con que el Estado deje de ser un freno; quiero que sea un aliado real para el que trabaja, invierte y emprende.

La competitividad empieza por lo básico: poder transitar, sacar la producción, llevar insumos, conectar personas y mercados. Y no tengo que contarles el deterioro en las rutas y caminos que era indispensable revertir.

El desafío implicó varios frentes, como destinar el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a los caminos de la producción, y algo urgente: resolver la millonaria deuda en materia de obra pública que había llevado a paralizar todas las obras de la provincia, para que el Estado no siguiera recibiendo embargos por falta de pago a contratistas.

En menos de dos años, pasamos de tener la obra pública paralizada y más de 30 mil millones de pesos de deuda a reactivar las obras financiadas por la provincia y empezar otras nuevas. Hoy tenemos por primera vez una planificación estratégica, responsable y ordenada, para que las obras que se inician, se ejecuten en tiempo y forma.

También nos ocupamos de modernizar las reglas del juego, para aceitar procesos y bajar los costos de las obras: decidimos que la provincia no cobre más Ingresos Brutos ni Impuesto a los Sellos a la obra pública, trabajamos en un Pliego Único de Condiciones Generales y en un nuevo Registro de Contratistas y Proveedores, e implementamos procesos digitales y un nuevo sistema de redeterminación de precios para sostener contratos con previsibilidad. Pusimos un norte claro: que los certificados se paguen en tiempo y forma, con un sistema que corte el circuito de pago de intereses que encarecía las obras. Durante años, esas demoras generaban intereses millonarios que después se disfrazaban como “inversión”, como si fueran parte de la obra. Nosotros terminamos con esa lógica: ordenamos el circuito de pagos y así logramos reducir en más de un 90 por ciento el costo financiero asociado a intereses por mora.

Para conseguir mejores precios, enviamos a la Legislatura un proyecto de nueva ley de Compre provincial que prioriza nuestras empresas locales y, al mismo tiempo, garantiza la libre competencia y la concurrencia de ofertas. Y sancionamos un nuevo Régimen de Iniciativa Privada porque necesitamos obras que requieren grandes capitales que hoy el Estado no tiene.

Además, estamos avanzando en la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial, para que las obras sean resultado de una estrategia a largo plazo consensuada entre todos los ámbitos de la política local.

Sé que el estado de las rutas es una de las mayores preocupaciones de todos los que me están escuchando, por eso quiero contarles cómo venimos trabajando en este tema.

Lo primero que hicimos, mientras avanzábamos para poder hacer obras estructurales que implican procesos que llevan tiempo, fue ocuparnos de garantizar la transitabilidad: en un marco de austeridad, pusimos en marcha un plan de mantenimiento y conservación vial progresivo en grupos.

Ya recuperamos casi 700 kilómetros de rutas provinciales de los 2.000 previstos en esta planificación. Estamos avanzando a pasos acelerados con las obras del Grupo 1, que vamos a terminar en pocos meses, y están en proceso de adjudicación las del Grupo 2 para arrancar las obras en abril.

Dentro del Grupo 1, están incluidas la ruta provincial N° 11, el acceso a Tres Bocas desde la ruta provincial N° 11 y las rutas provinciales N° 16, la 20, la 26, la 51 y la 45, que para muchos puede ser una obra más, pero para los isleños es mucho más que una ruta.

Con mucho esfuerzo, hicimos el bacheo para que pueda ser transitada, pero se deterioró en otros tramos. ¿Por qué? Porque cuando una ruta se hace mal, sin la capa asfáltica adecuada, los parches no alcanzan.

Durante años se hicieron inversiones que no tuvieron ni la escala ni el enfoque técnico necesarios para responder a las condiciones reales de la traza ni al nivel de tránsito que soporta; en definitiva, el problema estructural nunca se resolvió. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer ahora: resolverlo de manera definitiva.

Por eso, en el caso de la ruta a Ibicuy, avanzamos en el diseño de un proyecto de reconstrucción integral y evaluamos su financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, los estudios ambientales y sociales demostraron que ese esquema no es viable en este caso. La traza tiene familias y actividades económicas ubicadas dentro del corredor en condiciones informales, y su liberación total, de acuerdo a los estándares de los organismos internacionales, implicaría un impacto social y plazos muy prolongados.

Frente a esto, nuestra responsabilidad es no seguir postergando una solución que la gente necesita. Estamos trabajando en una alternativa viable, oportuna y definitiva, que nos permita ejecutar este año la obra como corresponde, garantizando seguridad, conectividad y, sobre todo, respeto por las personas.

Dentro del Grupo 2, están incluidas la ruta provincial N° 23 entre las rutas nacionales 130 y 18; la ruta provincial N° 38 entre San Salvador y la ruta nacional 14; la ruta a Puerto Yerúa; la ruta provincial N° 22 entre la ruta Nacional 14 y Federal; y la ruta provincial N° 4 entre la ruta nacional N° 14 y Los Charrúas.

Además, están previstas dentro del Grupo 2 la reparación y protección en el Puente que está sobre Río Gualeguay en Paso Duarte; la alcantarilla sumergible sobre Arroyo San Miguel y la calzada sumergible en el arroyo Gualeguaycito.

Paralelamente, estamos en la etapa final del Plan de Mejora de Caminos de la Producción que implementamos, a pesar de haber tenido las peores condiciones climáticas de los últimos 10 años y de estar trabajando con un tercio de las maquinarias que se necesitan para esta tarea.

Apenas llegamos, nos encontramos con una Dirección de Vialidad Provincial mucho más frágil de lo que era hace 30 años, cuando la intensidad en la producción y por lo tanto en el uso de caminos tuvo un aumento superlativo que, claramente, no fue acompañado por las inversiones necesarias.

Esto generó una brecha entre las demandas crecientes y la inversión insuficiente, y es difícil cerrarla de un día para el otro, pero ya empezamos: apenas asumimos, trabajamos a contrarreloj para poner en funcionamiento maquinarias que estaban en desuso. Y, como este esfuerzo no alcanza, este año vamos a iniciar la compra de equipamiento más grande de las últimas décadas para revertir este atraso.

Son 25.000 kilómetros de caminos rurales y productivos que estamos interviniendo en estas condiciones, algunos por primera vez en la historia, para

que los entrerrianos podamos transitar y nuestra producción pueda ser trasladada. Hace pocos días, por ejemplo, empezamos a trabajar en el camino que une a Viale y Maciá, un símbolo del abandono.

Mientras nos ocupamos de la ejecución del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, del Plan de Mejora de Caminos y del perfeccionamiento de las reglas de juego para seguir ganando eficiencia, también avanzamos en obras viales estructurales.

Empezamos la rehabilitación de las rutas provinciales N° 32 entre Crespo y Viale, la N° 10 en las cercanías de María Grande, y la A03 en el ingreso a Piedras Blancas y Hernandarias.

Ya estamos por terminar las obras del acceso norte a Gualeguaychú por la ruta provincial N° 20, después de años de abandono y de ser un peligro mortal; finalizamos la pavimentación del tránsito pesado a Pueblo Brugo y a Larroque por Avenida 25 de Mayo; y estamos avanzando con la rehabilitación de la ruta provincial N° 39.

También estamos trabajando en otras obras como el cruce entre la ruta nacional N° 12 y la ruta provincial N° 6 que, una vez finalizadas, van a ser un salto de calidad para la transitabilidad y la seguridad vial en nuestra provincia.

Además, están en marcha las obras del Puente Paso El Cinto y del acceso Norte Concepción del Uruguay desde la ruta nacional N°14.

Y avanzamos en el acceso al Túnel Subfluvial y en la pavimentación de tramos esenciales en San Benito, en Aldea San Antonio y entre Aldea Santa Rosa y Aldea San Rafael.

Estamos avanzando a contrarreloj y por todos los medios posibles para que, al final del mandato, el 100 por ciento de las rutas y caminos abandonados hayan sido intervenidos.

Como parte de ese proceso, también hicimos gestiones para obtener garantía soberana de Nación y dimos pasos clave en negociaciones con organismos multilaterales de crédito para acceder a financiamiento por más 300 millones de dólares, lo que nos permitió proyectar para 2026 el mayor presupuesto de obra pública de la historia reciente en Entre Ríos. Ya avanzamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, y también estamos cerrando gestiones con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Con ese financiamiento, vamos a encarar obras viales estructurales que la provincia necesita, como la repavimentación de la ruta N° 1 entre la ruta nacional N° 12 y Feliciano; la ruta N° 2 entre la ruta nacional N° 14 y Feliciano; la ruta N° 46 a Paranacito, que la vamos a rehacer y a terminar después de un cuarto de siglo; la Circunvalación de Nogoyá; la ruta N° 6 entre la ruta nacional

N° 18 y la ruta provincial N° 39, y la ruta N° 20 entre la ruta provincial N° 39 y la ruta Nacional N° 130.

Pensar la infraestructura de forma integral implicaba mirar más allá de la red vial. El año pasado inauguramos el nuevo edificio del aeropuerto de Concordia, con una inversión superior a 40 millones de dólares financiada por el BID. Un paso histórico en uno de los desafíos más importantes de esta gestión, y un objetivo que me propuse personalmente: que Concordia deje de ser conocida por la pobreza y sea admirada por todo su potencial.

Y no puedo dejar de hablar de infraestructura y logística sin mencionar nuestros puertos, porque no exagero cuando digo que los entrerrianos tenemos una ventaja comparativa única y podemos convertirnos en un nodo clave para la producción, el comercio y la integración regional.

Nuestra provincia cuenta con cuatro puertos públicos: el Puerto de La Paz, el de Diamante, el de Concepción del Uruguay y el de Ibicuy. En la primera mitad de la gestión, trabajamos para sanear y fortalecer el sistema portuario, creando las condiciones para recuperar confianza y atraer inversiones.

Hoy estamos dando un salto estratégico. Por primera vez en la historia, Entre Ríos participa activamente en la hidrovía Paraguay-Paraná, defendiendo nuestros intereses en una discusión central para el desarrollo del país. Y, al mismo tiempo, sostenemos el mantenimiento de la vía navegable del río Uruguay, en coordinación con la República Oriental del Uruguay, promoviendo la posibilidad de extender la navegación comercial hasta Concordia.

Nuestro desafío no es solo mover más carga, sino diversificarla y agregar valor, para que nuestros puertos sean plataforma para multiplicar nuestras exportaciones.

Hacer una provincia competitiva exige abordar varios frentes a la vez. Cuando alguien evalúa invertir, mira todas las variables: reglas claras, infraestructura, logística, previsibilidad y costos. Estamos, y estoy personalmente, encima de todos y cada uno de esos factores.

Y hay uno que pesa de manera decisiva: el costo de la energía.

Durante años, los entrerrianos sufrimos la injusticia de tener una de las tarifas eléctricas más caras del país. Esa realidad desalentó inversiones, encareció producir y golpeó a las familias entrerrianas. Cuando asumimos, tomamos la decisión política clara de dejar esa triste posición y ordenar el sistema energético.

Todo lo que podíamos hacer desde nuestro lugar, lo hicimos. Actuamos en todos los componentes de la tarifa donde la provincia tiene injerencia: Congelamos el Valor Agregado de Distribución, eliminamos todos los impuestos

provinciales de la boleta y reforzamos los subsidios para pequeñas demandas, incluyendo pymes, emprendedores, productores y prestadores de servicios.

Dimos un paso más y redujimos drásticamente la tasa de fiscalización del ente regulador, que pasó del 1,8% al 0,8%, un alivio directo en la factura.

Gracias a este conjunto de decisiones, en menos de dos años, Entre Ríos dejó de ser la provincia con la tarifa más cara y pasó a estar en la mitad del ranking nacional.

Y no me conformo. Sé que la tarifa sigue siendo difícil de pagar para muchas familias y muchas pymes, y quiero que sigamos mejorando posiciones.

Por primera vez en la historia, llevamos a la Corte Suprema el reclamo por una tarifa justa para la energía de Salto Grande, para defender lo que le corresponde a Entre Ríos. Logramos que se definiera un aumento del 28% en la remuneración total de la represa, pero sabemos que falta y por eso vamos a sostener nuestro reclamo.

Y, como sabemos que la boleta también tiene componentes municipales, impulsamos acuerdos con los intendentes, más allá de los colores políticos, para construir un esquema más justo y razonable. Concretamos dos decisiones clave: bajar el tope de las tasas municipales del 16% al 13% y reducir la contribución municipal del 8,69% al 6%.

No sólo buscamos bajar costos: estamos transformando la matriz energética de la provincia y avanzamos en energía limpia: inauguramos el Parque Solar del Autódromo de Paraná y el Parque Solar de Sauce Pinto, que son parte de un plan que prevé 12 parques solares hacia fines de este año.

Y acompañamos al sector productivo con financiamiento para energías renovables. Somos la tercera provincia del país en cantidad de usuarios generadores y potencia instalada.

Otro tema clave que hace a la competitividad es la carga impositiva.

Éste es un gobierno que vino a aliviar la presión fiscal. Y cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a sostener y profundizar este camino.

Fuimos probablemente el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, en lugar de aumentar los impuestos como se hizo siempre, los bajó. El criterio fue cuidar los servicios esenciales y aliviar donde hay trabajo y producción.

Avanzamos con un esquema de alivio fiscal concreto y focalizado por sectores, y hoy prácticamente toda la industria entrerriana está exenta del pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos o tributa alícuotas muy bajas.

También bajamos la alícuota de Ingresos Brutos para los prestadores de OSER y para el suministro de electricidad y gas para la industria, la producción primaria y el comercio.

Redujimos en un 80 por ciento el Impuesto a los Sellos para la inscripción de camiones, maquinaria agrícola y vehículos de carga 0km afectados a actividades productivas. Y establecimos una alícuota reducida del 1,5 por ciento en Ingresos Brutos para empresas de transporte de carga y pasajeros que tengan sus unidades radicadas en Entre Ríos.

También corregimos distorsiones en cadenas productivas estratégicas como la comercialización de granos, ya que el sector venía reclamando equidad tributaria.

Eximimos del pago de Ingresos Brutos a los proveedores de internet que prestan el servicio en localidades de hasta 60.000 habitantes, un beneficio para los pequeños proveedores locales.

Con respecto a los demás tributos, con mucho esfuerzo en este contexto, decidimos que se actualizaran por debajo de la inflación, es decir que se redujeron en términos reales. Y para este año vamos a seguir este mismo camino: como ya comunicamos en los últimos días, el Impuesto Inmobiliario Urbano va a tener un tope de incremento del 30 por ciento frente al 31,5 por ciento de inflación.

Hoy más del 90 por ciento de los productores primarios tributa con alícuota cero. Y redujimos la alícuota de Ingresos Brutos para los integradores de pollos del 3 al 1,5 por ciento, fortaleciendo un sector clave.

Bajar impuestos no significa desfinanciar al Estado, sino ordenar y ser justos para que los que cumplen no sean los que sostienen al resto. Por eso incorporamos un esquema de control inteligente, que combina detección remota con tecnología y equipos técnicos, y avanzamos con una política pública estructural en materia catastral, para que ese impuesto refleje la realidad.

En materia de simplificación tributaria, también avanzamos con la eliminación de más de 100 tasas. Había ejemplos insólitos: se cobraba por acceder a información que es pública o por consultar un expediente.

Y junto con la simplificación y el alivio fiscal, tomamos una decisión que marca un rumbo de transparencia: Entre Ríos fue una de las únicas 5 provincias del país en adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Así que este año los entrerrianos vamos a poder ver qué impuestos estamos pagando y cómo se conforman los precios. Una obligación clara de la Constitución Nacional.

Todos estos avances en materia de alivio fiscal demuestran que en Entre Ríos recogimos el guante y ya empezamos a hacer lo que había que hacer. Pero

también demuestran otra cosa: si no hay coordinación entre Nación, provincias y municipios, el alivio queda a mitad de camino. La competitividad que necesita la Argentina no se construye con esfuerzos aislados, sino con un acuerdo fiscal serio que permita bajar, de manera gradual y responsable, los impuestos más distorsivos en todos los niveles del Estado.

En ese camino, debemos trabajar entre Nación, provincias y municipios, porque, si se reducen impuestos nacionales como las retenciones o el impuesto al cheque, eso va a permitirnos seguir bajando tributos provinciales distorsivos como Ingresos Brutos.

El Gobierno Nacional dio muestras de querer avanzar por un rumbo de reducción impositiva, por ejemplo, reduciendo las retenciones, o creando el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, al que Entre Ríos adhirió.

Y no sólo impulsamos que nuestra provincia adhiriera a este régimen, sino que también creamos nuestro propio Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, que le dice bien claro al que quiere invertir: en Entre Ríos se puede planificar y se puede crecer a largo plazo. Para que se entienda lo que significa: las nuevas inversiones en la provincia no pagan impuestos provinciales por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20 años.

Afortunadamente, logramos que se aprobara la ley con el apoyo de algunos miembros de la oposición, y pasó lo que esperábamos: la mayoría de los privados, ante la oportunidad, hablando mal y pronto “se tiraron de cabeza”. Ya vamos 200 millones de dólares en inversiones comprometidas y casi 2.000 nuevos puestos de trabajo. No inventamos nada; es básico: cuando el Estado deja de poner trabas, el sector privado responde y la inversión aparece.

En los próximos dos años, vamos a seguir ampliando a más sectores el RINI para fortalecer más la matriz productiva de nuestra provincia.

No es lo único que hicimos para impulsar la industria: después de más de 20 años de trabas, pusimos en regla los parques industriales de Colón y Basavilbaso, y hoy ofrecen beneficios impositivos, financieros y tributarios para las empresas que ya están y para las que quieran instalarse.

Las exportaciones de Entre Ríos al mundo crecieron en estos dos años casi un 90 por ciento, en distintos rubros. Y nuestra provincia aumentó su participación en las exportaciones del total nacional, pasando del 1,7 por ciento en 2023 al 2,41 por ciento el año pasado.

Y con la Agencia de Desarrollo que votó esta Legislatura, vamos a promover las inversiones y las exportaciones, porque no alcanza con esperar a que los capitales lleguen. A través de la agencia, vamos a salir a buscar mercados para que nuestros productos y servicios lleguen al mundo. Éste es un Estado que no

se queda esperando, que golpea puertas y se mueve constantemente para buscar oportunidades.

Esa misma lógica la aplicamos al financiamiento. No esperamos a que el sector productivo venga a pedirle al Estado; nos acercamos nosotros a contarles qué herramientas tienen disponibles y los acompañamos para que puedan acceder a ellas. Cambiamos el paradigma.

Así, empezamos un trabajo como nunca antes se había hecho entre la provincia y el Consejo Federal de Inversiones. Hoy Entre Ríos es la provincia con mayor cantidad de créditos gestionados ante este organismo, con más de 30.000 millones de pesos en proyectos productivos.

No es el único tipo de financiamiento que otorgamos: también, a través de distintas entidades como el Banco Entre Ríos, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, pusimos a disposición créditos para compra de maquinaria agrícola, para la cadena láctea, para empresas lideradas por mujeres y para distintas cadenas de valor, entre otros. E impulsamos el comercio desde el Sistema de Crédito de Entre Ríos, dando préstamos y facilidades.

Otro avance importante para el campo es el Documento Único de Tránsito, que puede pagarse con débito automático o de forma digital y evita que los productores tengan que trasladarse. En noviembre se cumplió un año de su implementación y ya se tramitaron más de 200.000 autorizaciones para transportar más de 10 millones de cabezas de ganado.

Es una muestra de que, para nosotros, la modernización del Estado no tiene el único objetivo de llevar más transparencia. También busca eliminar costos y trámites burocráticos que demandan horas de viaje a los productores. Por eso vamos a seguir trabajando para que todos los permisos sean digitales, y estamos trabajando también para simplificar los trámites para los citricultores.

En esa misma línea, impulsamos una reforma del Código Fiscal para que la vigencia de las marcas pase de 5 a 10 años y la marca sea de por vida, ya que antes muchos productores, por no hacer el trámite de renovación, perdían su marca, muchas veces parte de su historia familiar.

Además, la reciente sanción de la Ley de Gestión Ambiental de las Actividades Económicas deja atrás una norma heredada de la dictadura que nos condenaba a la democracia: trámites con demoras de hasta siete años, expedientes duplicados, discrecionalidad, empresas que perdían oportunidades por esperar una firma. Aún con la ley de 1978, ya logramos reducir los procesos que llevaban hasta casi siete años a 18 meses. Con esta nueva ley, creamos el certificado único ambiental que reemplaza cuatro certificados diferentes y concentra todo en un solo trámite digital y trazable.

Cuando hablamos de habilitaciones ambientales, más allá del trámite, hablamos del cuidado de los recursos que sostienen nuestra producción.

Para nosotros, la agenda ambiental es una oportunidad concreta para atraer inversiones y generar empleo de calidad.

En 2025 alcanzamos un récord histórico a nivel país en la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios, un aumento del 71% que ratifica el compromiso del sector agropecuario entrerriano con la economía circular.

Además, el año pasado nuestra provincia volvió a marcar un hito en materia de conservación de la naturaleza con la creación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del río Uruguay, un paso decisivo para impulsar el turismo de naturaleza.

El turismo de naturaleza es apenas una de las tantas expresiones del potencial turístico que tiene Entre Ríos.

Incluso en un año difícil para la economía, nuestra provincia estuvo en todos los fines de semana largos por encima de la media nacional en movimiento turístico.

Para este fin de semana largo que acabamos de terminar, tuvimos una ocupación del 97 por ciento. Esto significó más de 32 mil millones de pesos de impacto en un fin de semana, gracias a los más de 365 mil turistas que nos visitaron.

Para nosotros, el turismo nunca fue un sector más sino una prioridad. Lo primero que hicimos fue algo que durante años se prometió y no existía: una política pública real, construida junto al sector privado y con una hoja de ruta de largo plazo. A través del Ente Mixto de Turismo, integramos al sector privado, académico y profesional a la toma de decisiones. Juntos, creamos una propuesta dividida en 10 microrregiones turísticas con gobernanza propia, para que cada una muestre mejor sus atractivos.

Pusimos especial foco en la promoción. La campaña Modo Carpincho logró que nuestra provincia sea elegida con una premisa clara: mostrar ni más ni menos que lo que somos. El Carpi puede ser simpático y hacer reír, pero lo mejor que tiene es que dice la verdad. Entre Ríos es el mejor lugar del país para vacacionar.

Y así como llevamos a Entre Ríos a millones de pantallas a través de la campaña Modo Carpincho, también decidimos hacer de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires una plataforma activa de promoción, además de ser una herramienta para difundir nuestra cultura y fortalecer los lazos de las empresas entrerrianas con las cadenas productivas del país y del mundo.

Y, gracias al apoyo del Gobierno Nacional, fortalecimos nuestro calendario de fiestas y carnavales, incluyendo un hito que nos llenó de orgullo: el

reconocimiento del Carnaval de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, después de 41 años de espera.

Y una decisión que marcó un antes y un después para el turismo: recuperar lo que es de todos y devolverle sentido común y orden a espacios que habían sido símbolo del abandono. Hace apenas dos años, tres joyas turísticas de Concordia, el camping Las Palmeras, el Hotel Ayuí y Tortuga Alegre, estaban usurpados, deteriorados y fuera de toda lógica de desarrollo. En menos de dos años, logramos recuperarlos para que recuperen el valor que supieron tener.

Si hablamos de turismo, no puedo dejar de mencionar una preocupación muy seria que tenemos los entrerrianos porque tiene impacto directo en este sector: el proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a nuestra ciudad de Colón.

Venimos trabajando este tema desde que se hizo pública la intención de instalar la planta. Viajé varias veces a Uruguay llevando personalmente el reclamo de la provincia de relocalizar el proyecto para evitar impactos negativos sobre la actividad turística, el paisaje ribereño y las economías que dependen del uso del Río Uruguay. Y logramos avances: el gobierno uruguayo solicitó a la empresa que se incluyera a Colón dentro de la zona contemplada para el estudio de impacto ambiental que necesita una obra de esta magnitud. Un paso fundamental para nuestro reclamo.

Vamos a seguir dialogando para avanzar hacia una solución consensuada, sin abandonar nuestro compromiso de proteger a las comunidades de la costa del Uruguay y garantizar un desarrollo que cuide la actividad turística y las economías locales.

Los entrerrianos aprendimos del pasado reciente. El camino no puede ser cortar los puentes ni enemistarse con nuestros hermanos. Pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por eso elegimos la vía del trabajo en conjunto como única salida para saldar diferencias y llegar a puntos de acuerdo con responsabilidad institucional.

Nuestra posición es firme: cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos los que somos parte de él. Y de esta posición no nos van a mover.

Posicionar a Entre Ríos también implica pensar el turismo desde una mirada más amplia y estratégica. No sólo como un destino de paisajes, sino como una provincia sede de eventos, congresos y actividades capaces de atraer nichos específicos que generen valor, visibilidad nacional e internacional, movimiento económico y trabajo local sostenido, más allá de la temporada tradicional.

Parte central de este proceso de posicionamiento es la decisión de integrar a Entre Ríos en la economía del conocimiento.

La economía del conocimiento hoy genera en Argentina unos 20.000 millones de dólares al año, es el tercer complejo exportador de Argentina, emplea a unas 400.000 personas y genera uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo privado registrado.

La provincia tiene empresas e instituciones vinculadas a este sector, pero todavía el Estado no le prestaba atención. Por eso tomamos nota y nos propusimos convertir a Entre Ríos en un centro de desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Con el acompañamiento del CFI, hicimos el primer relevamiento integral de las capacidades del sistema científico-tecnológico y de la economía del conocimiento de la provincia.

Impulsamos un trabajo sostenido de articulación entre el sistema científico, el sector productivo y el Estado. Organizamos eventos como Conertech, que convocó a más de 10.000 personas en Concordia y Paraná. Y trabajamos para promover vocaciones hacia áreas como Ciencia, Tecnología e Ingeniería, y desarrollando capacitaciones en robótica educativa, talleres de impresión 3D, drones y tecnologías aplicadas al agro.

Somos una de las cuatro provincias del país que están enseñando Inteligencia Artificial a chicos de 5° y 6° grado de escuelas primarias. Y, a través del programa Enseñar Conectados, más de 8.000 docentes están incorporando herramientas de Inteligencia Artificial.

El año pasado, avanzamos con un verdadero hito para la provincia: el MiradorTec, un espacio del Instituto de Seguro que iba a ser destinado a oficinas públicas y decidimos convertirlo en el primer parque tecnológico de Entre Ríos.

Más de 8.000 metros cuadrados en uno de los mejores lugares de Paraná que iban a ser oficinas públicas, y hoy son laboratorios, salas de reuniones y espacios de coworking para que más de 600 personas puedan generar conocimiento entrerriano. A menos de cinco meses de su inauguración, ya tenemos 28 empresas instaladas, y unos 20 proyectos incubando.

El MiradorTec ya es referencia a nivel nacional y fue reconocido con el Premio Sadosky a la Innovación Regional 2025 por la Cámara de la Industria Argentina del Software, además de una mención especial como proyecto de Alto Impacto en los Premios GovTech de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina en el Congreso de la Nación. Y estamos trabajando para que sea un hub de innovación de primer nivel, como el de Medellín, el de Guadalajara o el de Barcelona.

Entre Ríos es ahora una provincia decidida a mirar al mundo con inteligencia y ambición, impulsando una agenda internacional propia y enfocada en el desarrollo.

En estos dos años, construimos una política de cooperación internacional de largo plazo, recuperando la presencia y el posicionamiento de nuestra provincia en el escenario global. Llevamos la voz de Entre Ríos a foros internacionales donde se discuten los desafíos centrales del desarrollo contemporáneo e impulsamos una relación estratégica con Alemania, y especialmente con el Estado Libre de Baviera. Consolidamos una hoja de ruta que ya se traduce en proyectos concretos, como programas de intercambio académico, una agenda de atracción de inversiones canalizada a través del MiradorTec y la Agencia de Desarrollo y líneas de investigación aplicada a energías renovables, robótica, biotecnología y agroindustria sustentable.

Este vínculo con el mundo es parte de una visión más amplia sobre cómo concebimos la institucionalidad y la relación con otros actores, con los ciudadanos y entre distintos niveles del Estado.

Creemos en una institucionalidad que da previsibilidad y que está orientada a resultados concretos.

El federalismo se ejerce con diálogo, pero también con decisión: por eso fuimos el primer gobierno de la provincia en reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que corresponden a Entre Ríos en materia previsional y por la energía que se genera en Salto Grande, y vamos a sostenerlos con firmeza y respeto institucional.

En esta primera mitad de nuestra gestión, logramos avances concretos.

Uno de ellos tiene que ver con nuestra Caja de Jubilaciones. Cuando empezé nuestra gestión, la Caja no interactuaba con la Ansés desde 2017. Retomamos el diálogo y fuimos la primera provincia que firmó un convenio con el organismo para restituir los anticipos. Así, se reconoció la deuda y empezamos a recibir 2 mil millones de pesos mensuales para cubrir el déficit previsional, que luego logramos triplicar y hoy la provincia recibe 6.000 millones por mes por este concepto. Y tenemos el compromiso de que, al finalizar las auditorías a fines de mayo, esta compensación crezca sensiblemente. De todas maneras, vamos a continuar con el reclamo en la Corte hasta que Nación termine de cancelar los saldos de deuda.

Dimos pasos concretos para la transferencia a la provincia de terrenos de la Costanera de Paraná y firmamos un acuerdo para avanzar de manera conjunta en la recuperación del Palacio San José, un emblema de nuestra provincia y de nuestra historia nacional.

Además, logramos la transferencia del Puerto de Paraná a la provincia. Después de más de veinte años de abandono y de gestiones frustradas, logramos que la Nación entendiera que el puerto tenía que estar al servicio del desarrollo de Paraná y de Entre Ríos.

También estamos avanzando para mejorar las rutas nacionales: logramos, tras un esfuerzo sostenido con Nación, que el sistema de concesiones empezara por Entre Ríos. Ya comenzamos los trabajos en la ruta 14 y tenemos el compromiso de terminar, después de casi dos décadas, la ruta N° 18. Se ven además con claridad los avances en la ruta nacional N° 12 de Buenos Aires a Paraná. Y Nación comprendió nuestro planteo de intervenir, por razones de seguridad, la ruta nacional 127 y la 136 y la 15 que nos unen con Uruguay.

En materia de transporte ferroviario, firmamos un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la operación de servicios ferroviarios de interés provincial.

Y trabajamos en otros temas clave que ya mencioné hace unos minutos: el aval soberano del Gobierno Nacional que nos permite acceder a financiamiento multilateral para intervenir las rutas provinciales; el aumento de la remuneración que recibe la provincia por la energía que se genera en Salto Grande, la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay y la transferencia a la provincia de los terrenos nacionales lindantes al hospital De la Baxada para impulsar un plan de más de 300 viviendas.

No sólo nos ocupamos del vínculo con Nación. También fortalecimos nuestra relación con otras provincias: en estos dos años, la Región Centro y la Región Litoral se consolidaron como ámbitos de trabajo efectivo, con una agenda común activa enfocada en la integración productiva, en misiones comerciales conjuntas y la coordinación de políticas públicas en materia de educación, seguridad, salud, cultura, ciencia y trabajo.

Gobernar exige una relación madura y previsible con los municipios.

Recorro todas las semanas distintas localidades de los 17 departamentos para ver los avances de la gestión y conocer de primera mano las prioridades locales y los problemas reales.

Institucionalizamos una práctica que no existía: las reuniones de gabinete compartidas entre la provincia y los gobiernos locales. En promedio, venimos realizando casi dos por mes.

Pusimos en funcionamiento un sistema digital de ventanilla única y hoy cada trámite tiene seguimiento, plazos claros y mayor velocidad de resolución.

Además, avanzamos, a partir de criterios objetivos, en la creación de más de 20 nuevas comunas. Un paso clave que reconoce formalmente a decenas de localidades y amplía derechos, autonomía y capacidad de gestión local.

En este punto, quiero hablar del vínculo con los ciudadanos. Es el corazón de ese cambio cultural que estamos impulsando, porque cuando llegamos teníamos que reconstruir años de desconfianza entre la política y la sociedad.

Hoy los ciudadanos tienen acceso a la información de la gestión, herramientas para involucrarse y gobernantes que no les escondemos la realidad, aun cuando es difícil, porque confiamos en su madurez a la hora de comprender el momento que vivimos.

Un paso clave en este camino fue la sanción del nuevo Código Electoral, que incorpora la Boleta Única de Papel. Un sistema más simple, más ágil y más transparente, que además genera ahorro para el Estado.

Y, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, abrimos canales de escucha y participación, capacitamos a miles de trabajadores públicos para mejorar la atención a los vecinos.

Habiendo repasado gran parte del camino y de los desafíos que tenemos por delante, hay una realidad que vale la pena detallar.

Si durante 2025 logramos estos avances, si pudimos sostener obras e iniciar nuevas, si conseguimos inversiones y si proyectamos seguir dando pasos hacia adelante, no es porque tengamos más recursos económicos.

Los ingresos no mejoraron. La situación económica sigue siendo difícil. No sólo para el Estado sino también, y sobre todo, para las familias que se esfuerzan todos los días.

Esa realidad se ve en cada hogar y no hace falta explicarla demasiado. Pero sí puedo darles algunos datos que ayudan a dimensionar cómo este contexto afecta a las cuentas públicas.

Como consecuencia de la menor recaudación a nivel nacional, Entre Ríos sufrió en 2025 una caída de recursos de origen nacional de más de un punto con respecto al año anterior, y de casi 10 puntos en comparación con 2023.

A esto se suma un problema estructural de nuestra provincia: el peso del gasto que llamamos “rígido”. El 95 por ciento de los recursos tributarios se destinan al pago de salarios públicos y jubilaciones.

Y otro factor que también es importante aclarar: aunque en algunos sectores comienzan a verse señales de mejora, eso no necesariamente se traduce de manera inmediata en la recaudación. Los sectores que hoy muestran mayor movimiento no son necesariamente los que más tributan a nivel provincial, o lo hacen bajo esquemas que tienen bajo impacto en nuestros ingresos. Y, como ya dije, tenemos una decisión política clara frente a la cual no vamos a ir marcha atrás: bajar impuestos. Bajamos los impuestos que podrían haber generado más recaudación, porque no creemos que salir de una crisis deba ser asfixiando a quienes producen, invierten y generan empleo.

Entonces, el contexto difícil no cambió. Lo que cambió fue cómo estamos plantados frente a una situación económica igualmente crítica.

Y hoy estamos mejor plantados. No porque tengamos más recursos, sino porque pudimos ordenar el Estado.

Estamos mejor plantados porque mejoramos la capacidad de ejecutar el presupuesto.

Estamos mejor plantados porque hicimos y hacemos un esfuerzo sostenido por contener el gasto corriente.

Estamos mejor plantados porque nos hicimos expertos en gestionar sin plata.

Estamos mejor plantados porque hicimos del ahorro una política de Estado, y seguimos pasando el “peine fino” a la gestión para que no se gaste un peso si no es estrictamente necesario. Algunas decisiones tienen más impacto, otras son “microahorros”, pero hay que eficientizar en todo lo que podamos.

Estamos mejor plantados porque logramos construir un vínculo institucional y de trabajo con el Gobierno nacional, sin renunciar a nuestros reclamos.

Estamos mejor plantados porque desactivamos las bombas de tiempo que encontramos cuando llegamos a punto de explotar: la deuda en materia de obra pública, el déficit de la Caja de Jubilaciones, el Iosper, la ausencia de liquidez.

Estamos mejor plantados porque, en un escenario de caída de la recaudación similar al que llevó a otros gobiernos a entrar en default, pasamos del déficit al equilibrio, honramos nuestros compromisos y redujimos la deuda pública.

Estamos mejor plantados porque ser buenos cumplidores hace que el mundo confíe nuevamente en Entre Ríos.

Estamos mejor plantados porque hoy existe un Estado que entiende que no puede endeudarse para solventar el gasto corriente, y que para eso es clave sostener el equilibrio fiscal.

Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece. Una provincia con presencia internacional y una agenda que trascienda coyunturas. Y esto recién empieza.

No tengo dudas de que vamos a poner a Entre Ríos en lo más alto. Y eso también implica poner en valor lo que somos, lo que fuimos y lo que nos hizo grandes.

Hace pocos días, conmemoramos un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros y, por tercer año consecutivo, reafirmamos una decisión clara: reivindicar el protagonismo de Entre Ríos y de Justo José de Urquiza en la construcción de nuestra nación.

Desde nuestra provincia fue que se impulsó un proyecto de país organizado sobre la ley, la educación, la producción y el federalismo. En esta tierra fue que se gestaron las ideas y los liderazgos que hicieron posible la organización nacional y el camino hacia la Constitución.

Reconocer a Urquiza y darle al 3 de febrero la relevancia que merece en el calendario nacional es una deuda histórica que tenemos como argentinos.

Entre Ríos tiene una historia grande. Una historia hecha de trabajo, de esfuerzo colectivo, de entrerrianos que siempre empujaron hacia adelante, aun cuando las condiciones no ayudaban.

Esa identidad es lo que nos da fuerzas para dar juntos cada día un paso más. Lo que nos permite seguir soñando en grande.

Porque, aunque cueste, y aunque seamos conscientes de que los cambios verdaderos llevan tiempo, sabemos que vamos por buen camino y que los entrerrianos tenemos con qué.

El tiempo que estamos viviendo nos pide ir más allá. Nos pide responsabilidad y compromiso. Nos pide no conformarnos con menos de lo que merecemos.

Yo no me conformo con menos.

No me conformo con que el Estado funcione a medias.

No me conformo con hacer las cosas como se hacían antes si se pueden hacer mejor.

No me conformo con que Entre Ríos se mida con la vara baja del pasado.

No me conformo con frenar la salida de talentos; quiero una provincia que atraiga nuevos talentos, que invite a volver a los que tuvieron que irse por falta de oportunidades.

No me conformo con haber salido del último lugar en los rankings nacionales de tarifa eléctrica o de desempeño fiscal: quiero que Entre Ríos juegue en la parte alta de la tabla.

Y ese desafío nos involucra a todos.

Es de esta Legislatura, que representa la pluralidad de nuestra provincia.

Es de los municipios y comunas, que conocen mejor que nadie la realidad del territorio.

Es del sector privado, que invierte, produce y genera trabajo.

Y es, sobre todo, de cada entrerriano y entrerriana que quiere vivir de otra manera y dejar algo mejor.

Porque este camino se construye en cada lugar y entre todos.

Si sostenemos este rumbo y seguimos elevando la vara, aun con las diferencias que podamos tener, podemos hacer de Entre Ríos una provincia protagonista.

Ese es el compromiso que renuevo hoy. Y esa es la huella que estamos llamados a dejar.

Una huella que muestre que no nos equivocábamos cuando decíamos, hace unos años, que los entrerrianos estábamos para más.

Una huella que, con el tiempo, va a dejar claro que esta generación decidió no conformarse y ponerse de pie.

Sigamos escribiendo, entre todos, un nuevo capítulo de nuestra historia.

Muchas gracias.